La Jornada

Revisa el INE demandas de alza salarial de cerca de 5 mil trabajadores

FABIOLA MARTÍNEZ

La presidenta provisional del Instituto Nacional Electoral (INE), Blanca Cruz, se reunió con funcionarios de la dirección ejecutiva de Administración (DEA) del órgano para evaluar las condiciones laborales del personal de los poco más de 800 módulos de atención ciudadana, de donde ha surgido un amago de paro para el lunes.

La advertencia se divulgó en redes sociales y, hasta ayer, las autoridades del INE no tenían claro si había alguna petición formal para la revisión de las condiciones laborales de este personal, cuyos salarios no se comparan con la de mandos medios y altos del instituto. En las protestas se afirma los sueldos del personal de los módulos, alrededor de 5 mil trabajadores, es el mismo desde hace muchos años y afirman que en algunos casos es menor a 10 mil pesos mensuales.

Por lo pronto, la presidenta provisional tuvo un encuentro privado con personal de la DEA, encabezada por Liliana Díaz de León Zapata, quien si bien tiene una trayectoria de 14 años en el Servicio Profesional Electoral Nacional, apenas el pasado 7 de mayo fue nombrada en el cargo por la entonces presidenta Guadalupe Taddei.

En esa mesa del área de consejeros –pues Cruz no usa el despacho de la presidencia del INE– revisan también los gastos operativos del instituto frente a un posible recorte de 5 mil millones de pesos a la solicitud presupuestal para 2027. En una primera declaración al respecto, la presidenta provisional dijo que se analizaría dónde impactaría la reducción, pero no habló de gestionar con los legisladores, como lo hicieron los anteriores presidentes del INE frente a las advertencias de recorte.

"Nosotros hacemos una solicitud, un anteproyecto de presupuesto y después la formalizamos. El proceso va a terminar cuando la Cámara de Diputados nos diga cuál es el monto asignado. ¿Qué tenemos que hacer cuando nos notifiquen?, revisar cómo se atiende el recorte, donde vamos a impactar modificaciones", señaló en entrevista.

Recorte de presupuesto

Dijo que una vez con esa información se analizará cuánto se autoriza para cada capítulo, como lo correspondiente a la nómina del INE y a la cartera institucional de proyectos "garantizando que no paremos el funcionamiento del instituto de cara al proceso electoral y que tampoco se afecte la calidad del proceso".

Señaló que en este momento ya no habría condiciones para buscar a los diputados y exponer cada necesidad y los números con base en los cuales se hizo la petición general (47 mil millones de pesos, incluido presupuesto para organizar consultas ciudadanas, así como el monto para financiamiento público de los partidos políticos). Se supone, añadió, que esas gestiones ya se hicieron.

La Razón DE MÉXICO

Cruz ofrece diálogo ante el amago de paro en módulos

| Redacción |

LA PRESIDENTA provisional del Instituto Nacional Electoral (INE), Blanca Cruz, ofreció diálogo directo al personal de los Módulos de Atención Ciudadana para revisar sus demandas salariales y condiciones laborales, ante el amago de paro del 9 de noviembre.

En entrevista radiofónica, ayer, la consejera garantizó que el trabajo de este sector "no está en riesgo, sus salarios tampoco", y descartó represalias. Explicó que se identificarán necesidades que pueden atenderse de inmediato y otras sujetas al presupuesto.

Cruz sostuvo que el ajuste de recursos se analizará para proteger las actividades electorales. También reiteró la colaboración con las autoridades fiscalizadoras y señaló que la entrega-recepción está bajo supervisión del Órgano Interno de Control.

441

Oficinas cerrarían en todo el país debido al paro

Por separado, la consejera Carla Humphrey informó que el INE prevé habilitar un mecanismo de denuncias anónimas para que trabajadores y ciudadanos aporten información sobre posibles irregularidades en contratos.

Indicó que las medidas incluyen acudir ante la Fiscalía General de la República (FGR) contra quienes resulten responsables, solicitar la intervención de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y otras autoridades, así como preservar documentos y fortalecer controles internos.

Humphrey planteó privilegiar las licitaciones públicas sobre las adjudicaciones directas y ampliar la participación de proveedores del instituto para recuperar la confianza ciudadana. La determinación de responsabilidades, subrayó Cruz, corresponde a las autoridades competentes.